**Hora de adoptar en serio una política de orden público**

***Autor: Roberto Chiti***

*Director de Análisis Político de DP*

**La calma en las calles con la que culminó el 2018 -producto fundamentalmente del incremento de la asistencia social acordada entre el gobierno y las organizaciones sociales-, tuvo su correlato lógico en una considerable disminución de los piquetes, contrariamente a lo que suele suceder en el tramo final de cada año. A tal punto que el que acaba de concluir fue el diciembre con menos cortes de vías públicas a nivel nacional (468) desde 2011.**

Si bien es cierto que en el balance anual los piquetes aumentaron un 12% y que por séptimo año consecutivo se superan los 5.000 cortes a nivel nacional, visto en perspectiva y en clave política, resulta significativo que en el peor año de la gestión Cambiemos se hayan registrado muchos menos piquetes (5.857) que en 2014 (6.805) y 2015 (6.323), los últimos dos años de gobierno kirchnerista.

La principal explicación a esta situación, en términos estadísticos, se encuentra en la drástica disminución de los piquetes realizados por vecinos autoconvocados, quienes, motivados fundamentalmente por los cortes de energía y hechos puntuales de inseguridad, pasaron de ser el principal actor en 2015 con 1551 cortes de calle, a ocupar el quinto lugar en 2018 con 688. Así, la mejora relativa en las estadísticas de piquetes parece obedecer más bien a situaciones específicas y circunstanciales que al resultado de una política de orden público.

El intento desde el inicio de la gestión Cambiemos de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación por establecer una línea de acción común con las jurisdicciones -cuyo ejemplo más concreto fue el denominado “Protocolo antipiquetes”- no tuvo eco ni siquiera en distritos del mismo signo político, como la Ciudad de Buenos Aires. Esa dinámica de falta de sintonía respecto a cómo intervenir con los piqueteros quedó de manifiesto en varios contrapuntos entre la ministra Patricia Bullrich y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, podría haber cambios de lineamientos en el futuro cercano.

En este sentido, distintos sucesos tornaron al escenario actual más propicio para la adopción de una actitud más decidida del Estado en la intervención para asegurar el orden en las calles. Pueden citarse así el proyecto de reforma del código penal en discusión (que establece mayores penas a quienes interrumpan la libre circulación), o la reciente aprobación de la ley que prohíbe la actividad de trapitos y limpiavidrios en la Ciudad. Al mismo tiempo, el contexto político electoral parece empujar en la misma dirección, a partir de la percepción de buena parte del arco político, de que la ciudadanía tolera cada vez menos las situaciones de caos y extorsión en la vía pública.

Al respecto, el hecho de que la capital del país haya registrado en 2018 su máximo histórico de cortes de calles (1.076) -lo que equivale al 18% del total nacional-, debería representar un punto de quiebre en el enfoque sostenido hasta hoy, que permita comenzar a desterrar la cultura del piquete y restablecer los conceptos del orden y el respeto al derecho del otro como valores imprescindibles en una sociedad democrática.